

Crimen, corrupción y pérdida del monopolio de la violencia en Honduras:

Reflexiones y apuntes de viaje a San Pedro Sula, Choloma, El Progreso y la Ceiba

Guadalupe Correa-Cabrera
Junio 2017

PRESENTACIÓN

Durante el periodo que abarca los días del 21 al 30 de mayo de 2017, viajé con mi colega Eric Olson, director asociado del Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, a las ciudades de San Pedro Sula, Choloma, El Progreso y La Ceiba para documentar la situación de violencia e inseguridad en estas regiones; analizar la operación de las maras y pandillas, así como sus vínculos con otros grupos delincuenciales—incluyendo delincuencia común y delincuencia organizada transnacional; y evaluar los avances en materia de reducción de la violencia por parte de las autoridades, así como el papel de la sociedad civil. Para ello, fue necesario realizar una evaluación de la situación política, socioeconómica y de seguridad general en el país. Algunas de las ciudades visitadas se encuentran entre las más violentas, no sólo de Honduras, sino de todo el hemisferio occidental. Las altas tasas de homicidio, la extorsión, el narcotráfico y el control de gran parte del territorio por parte de las maras y pandillas dificultan enormemente el desarrollo armónico de las comunidades y se constituyen como las causas principales del desplazamiento forzado interno y la fuerte emigración hacia otros países, sobre todo a los Estados Unidos de América.

En el marco de la visita, se realizaron entrevistas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo por presencia de pandillas y crimen organizado, autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Platicamos con miembros de la Policía Nacional; representantes del poder judicial; líderes empresariales; voluntarios y coordinadores de proyectos comunitarios para prevenir y erradicar la violencia; académicos y

especialistas en temas de violencia, seguridad y delincuencia organizada; personal que labora en centros penitenciarios e individuos “privados de libertad”; así como con ciudadanos que viven y trabajan en las comunidades antes referidas y que experimentan día a día los efectos de la inseguridad, la corrupción, la ausencia de Estado de Derecho y la concentración del poder público. Se visitaron dos de las regiones más violentas de Honduras—y de nuestro continente—ubicadas en el departamento de Cortés: Choloma y el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula. Finalmente se hizo una visita al interior de los dos centros penales de La Ceiba: el centro penal en el Barrio Inglés (para delitos menores) y la Granja Penal de El Porvenir.

El presente documento incluye algunas reflexiones sobre los temas de nuestro interés y se divide en dos partes. La primera parte mantiene un enfoque en la niñez y la juventud, así como en los esfuerzos para prevenir y reducir la violencia en regiones de alto riesgo o fuerte presencia de maras y pandillas. La segunda parte analiza fundamentalmente los temas de narcotráfico, corrupción, la pérdida del monopolio del uso legítimo de la violencia y la vida en los centros penitenciarios. Ambas secciones se desarrollan en espacios de elevados niveles de inseguridad, control de amplios territorios por parte de las maras y pandillas, tráfico de drogas y falta de Estado de Derecho. En la parte final del documento se abordan los temas de migración, drogas y pérdida de control por parte del Estado, y para terminar se hace una reflexión sobre el problema que parece ser el principal en Honduras: los elevados niveles de corrupción en distintos ámbitos de la vida en este país.

SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA: DOS CIUDADES HONDUREÑAS EXTREMADAMENTE VIOLENTAS

Niñez y juventud hondureña en espacios de extrema violencia

La ciudad de Choloma y el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula se encuentran entre las regiones más peligrosas de nuestro hemisferio. En años anteriores, San Pedro Sula llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo de acuerdo con algunos reportes y listas (rankings) internacionales. En dichas zonas de violencia extrema platicamos con líderes comunitarios y voluntarios en diversos proyectos sociales entre los que destacan los denominados “Centros de Alcance”.¹ Dichos centros tienen como objetivo “sensibilizar y movilizar a la comunidad para atender a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo, desarrollando sus habilidades en [un ambiente propicio], para su [exitosa] participación en la sociedad, previniendo el crecimiento de la violencia juvenil”. Entre los componentes del proyecto se encuentran: la formación de valores, la gestión de oportunidades, voluntariado, refuerzo escolar, capacitación para el trabajo, uso creativo del tiempo libre, entre otros.

1 Ver <http://www.ajhusaid.org/componentes/centros-de-alcance/>.

La recuperación de los espacios públicos en territorios dominados por las pandillas y la delincuencia organizada pareciera ser la misión principal de estos centros que cuentan con el apoyo de diversas instituciones, entre las que se encuentran la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros donantes internacionales, quienes se unen al esfuerzo del gobierno de Honduras y la municipalidad en regiones específicas. Es difícil medir el impacto de estas iniciativas cuyo papel es importante dadas las condiciones de extrema vulnerabilidad de los niños, jóvenes y adolescentes en zonas de alto riesgo. Sin embargo, el alcance y los resultados parecen ser, a primera vista, relativamente limitados, dadas las condiciones de inseguridad estructurales en sus zonas de ubicación. Asimismo, es difícil imaginar la auto-sustentabilidad de estas iniciativas en el largo plazo. No obstante lo anterior, los objetivos de este proyecto son relevantes y considero necesario mantener apoyos para reducir y prevenir la violencia, así como para recuperar espacios que son actualmente controlados por maras y pandillas. Quizás el enfoque podría modificarse un poco para lograr resultados a más largo plazo, y dirigir los esfuerzos hacia el sector educativo y la formación de capacidades, así como hacia la atención de las adicciones.

Las realidades de zonas extremadamente violentas como la ciudad de Choloma o el sector Rivera Hernández nos muestran un panorama devastador donde las adicciones se extienden a una población cada vez más joven y más numerosa. Incluso se menciona frecuentemente la venta y consumo de droga dentro de los mismos centros educativos (escuelas de nivel medio y básico) en distintas partes

Al mismo tiempo, se ha puesto a la población más vulnerable a merced de las pandillas, la delincuencia común y la delincuencia organizada.

del país. A este fenómeno se le suman la falta de oportunidades económicas y empleos limitados y mal remunerados. Por ejemplo,

el sector manufacturero—y la maquila en particular—en Choloma no ha brindado trabajos suficientes a los habitantes de esta ciudad, y en épocas recientes la falta de oportunidades y capacitación de los jóvenes los ha orillado a buscar emigrar a otras partes del país o hacia el exterior. Al mismo tiempo, se ha puesto a la población más vulnerable a merced de las pandillas, la delincuencia común y la delincuencia organizada. Una gran cantidad de jóvenes son reclutados de manera voluntaria o involuntaria por las pandillas locales o transnacionales pues pertenecer a estos grupos significa, para muchos de ellos, una fuente de ingreso y un espacio de pertenencia y protección.

Esquema de la delincuencia en Honduras

Existen varios niveles de delincuencia en este país centroamericano que son el reflejo de un sistema muy complejo de relaciones entre diversos actores (ver Figura 1 en la siguiente página). Dicho sistema involucra también a autoridades gubernamentales de todos niveles, e incluye al último eslabón del aparato de procuración de justicia que es el sistema penitenciario hondureño. Un primer nivel en este complejo esquema sería el de la delincuencia común,



Figura 1. Niveles de delincuencia en Honduras

que se extiende de manera importante a lo largo del país, y en especial en las zonas urbanas, dados los altos niveles de pobreza, marginación y desempleo. Un segundo nivel estaría constituido por el crimen organizado que opera exclusivamente en territorio hondureño; en otras palabras, estaríamos hablando de bandas criminales o incluso pandillas que se dedican a crímenes de orden local o regional como el narcomenudeo, robo a negocios específicos, robo a casas-habitación, extorsión, secuestro, entre otros. En este grupo no consideraríamos a organizaciones criminales transnacionales como la Mara Salvatrucha (MS-13) o Barrio 18 que operan dentro y fuera del país y que parecen tener conexiones con la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el narcotráfico internacional (que transporta droga de la región andina hacia los Estados Unidos). Esas maras o pandillas operan dentro y fuera del territorio hondureño, y de acuerdo con algunos expertos, pueden recibir apoyo de las mismas maras o pandillas que operan en otros países de la región—principalmente de El Salvador, Guatemala e incluso Estados Unidos.

El sistema de procuración de justicia y actores clave: La policía, el ejército y el sistema penitenciario

Cabe señalar que estos tres niveles de delincuencia (delincuencia común, delincuencia organizada local y regional y crimen organizado transnacional) no operarían sin el conocimiento —e incluso protección— de las autoridades de distintos órdenes, incluyendo a la policía, el ejército, representantes del poder judicial y personal que administra y labora en los centros penales hondureños. Es del conocimiento de muchos el contubernio que ha existido entre algunas facciones de la policía —e incluso del ejército— y las maras o pandillas

que operan a nivel local, regional o transnacional. Asimismo, se han reportado vínculos entre funcionarios gubernamentales y organizaciones dedicadas al narcotráfico—unas de origen nacional y otras que operan más allá de las fronteras de este país centroamericano.

El sistema de procuración de justicia en Honduras, para gran parte de los entrevistados en este viaje, presenta grandes limitaciones, lo cual ha facilitado la expansión de las pandillas transnacionales y el crecimiento del narcotráfico en diversas zonas del país y, de manera muy especial, en regiones como La Ceiba o La Mosquitia (esta última ubicada en el Departamento de Gracias a Dios). Asimismo, son del conocimiento general los altísimos niveles de corrupción en la policía de Honduras y en las diferentes agencias de seguridad. Por lo anterior, y debido a que dicho

fenómeno ha representado un problema fundamental para la seguridad en este país, en los años recientes

La reforma policial en Honduras se mantiene como una de las piedras angulares de la política de seguridad y combate a la violencia en la actual administración.

se han realizado importantes esfuerzos para erradicar este flagelo. La reforma policial en Honduras se mantiene como una de las piedras angulares de la política de seguridad y combate a la violencia en la actual administración.

Así, la Secretaría de Seguridad de Honduras² efectúa “profundas transformaciones en su estructura organizacional y de funcionamiento”, realiza una depuración de sus policías, establece prioridades y se reorganiza, al tiempo en que propone “un nuevo modelo de prestación de servicio, denominado Modelo Nacional de Policía Comunitaria”. Este modelo se sustenta en una “plataforma humanista que reconoce que su razón de ser es el servicio al ciudadano” y se basa en la creación de simbiosis entre la Institución Policial, las comunidades organizadas y otras instituciones públicas y privadas para mejorar la seguridad en territorio hondureño.³ En la práctica, la reforma policial en Honduras —y principalmente el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional⁴— ha sido bien vista por la comunidad en general, quien reconoce el esfuerzo pero no percibe aún resultados concretos o que sugieran una potencial reducción del crimen y la violencia a largo plazo.

Cabe destacar la reducción en el número de homicidios en diversas regiones del país en fechas recientes; esto según datos del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IUDPAS-UNAH)⁵ (ver Cuadro 1 y Gráfica 1 en la siguiente página). En las ciudades visitadas, se puede observar una relativa disminución en la tasa de homicidios desde el año 2011, principalmente en la ciudad de San Pedro Sula donde la reducción es significativa. Sin embargo, dicha tendencia no es aún clara en los casos de Choloma y La Ceiba. En estas dos ciudades se

2 Ver <http://seguridad.gob.hn/secretariaSeguridad/mision-y-vision>.

3 “Modelo Nacional de Servicio de Policía Comunitaria”, Policía Nacional de Honduras, Secretaría de Seguridad, Gobierno de la República de Honduras.

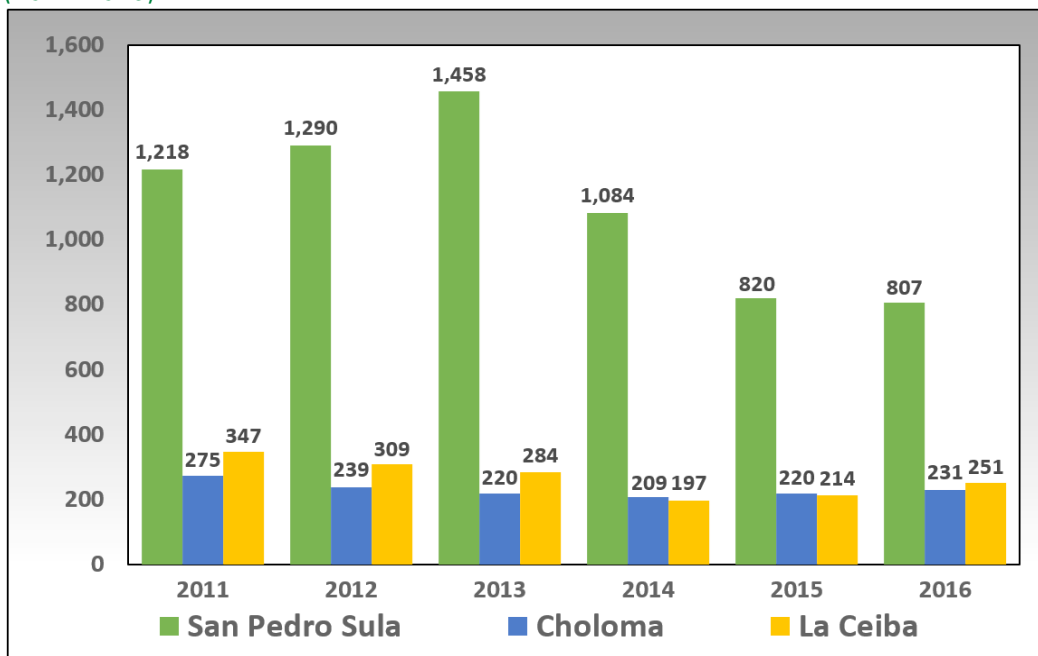
4 Ver <http://www.seguridad.gob.hn/policiaNacional/quienes-somos>.

5 Ver <https://iudpas.unah.edu.hn/>.

Cuadro 1. Número de homicidios en San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba (2011–2016)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
San Pedro Sula	1,218	1,290	1,458	1,084	820	807
Choloma	275	239	220	209	220	231
La Ceiba	347	309	284	197	214	251

Gráfica 1. Número de homicidios en San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba (2011–2016)



Fuente: Observatorio de la Violencia (IUDPAS-UNAH).

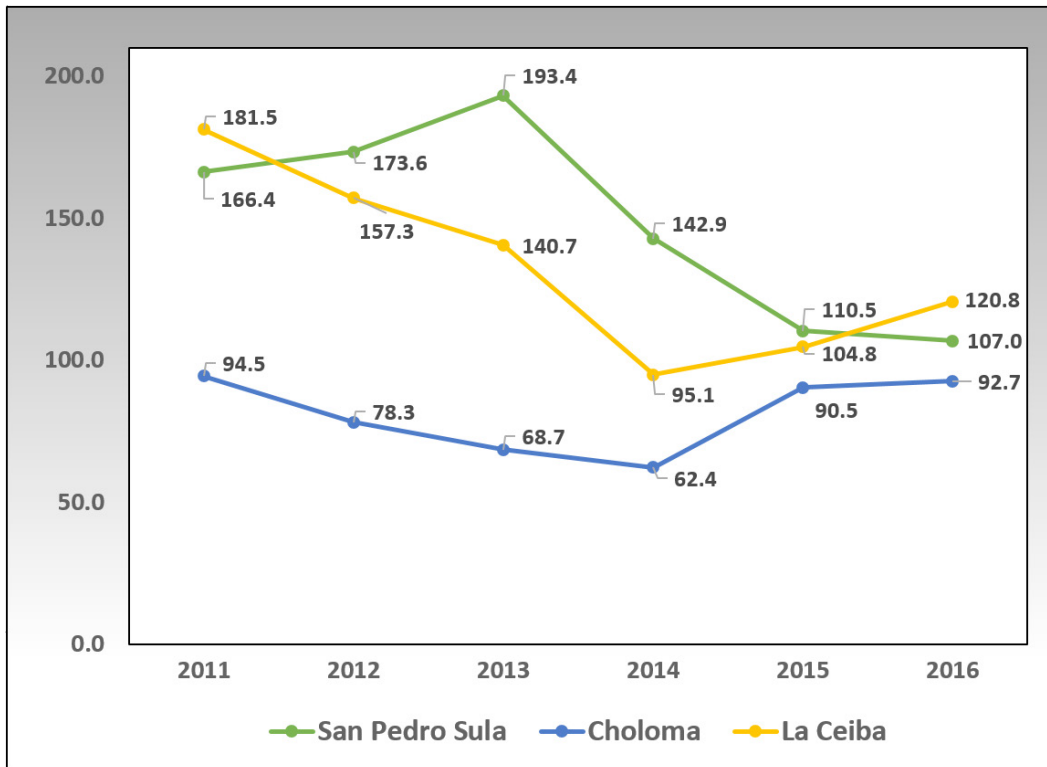
registraron incrementos en el número de homicidios en los últimos dos años.

No obstante que se registra un panorama positivo respecto a la tasa de homicidios en Honduras, algunos líderes comunitarios en zonas de alto riesgo —como el sector Rivera Hernández— nos comentaron que la corrupción continúa y que los beneficios de la reforma policial han sido limitados. Asimismo, destacan que continúan los abusos y acciones de limpieza social por parte de distintas agencias policiales. Es preciso mencionar que las fuerzas de seguridad hondureñas se conforman por una serie de agencias especializadas que tienen funciones diversas, entre las que destacan la Policía Nacional de Honduras, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), la Fiscalía Anti-mafias, la Unidad Antinarcoóticos del Ministerio Público, la Policía Militar del Orden Público (que es parte de las fuerzas

Cuadro 2. Homicidios por cada 100,000 habitantes (2011–2016)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
San Pedro Sula	166.4	173.6	193.4	142.9	110.5	107.0
Choloma	94.5	78.3	68.7	62.4	90.5	92.7
La Ceiba	181.5	157.3	140.7	95.1	104.8	120.8

Gráfica 2. Homicidios por cada 100,000 habitantes (2011–2016)



Fuente: Observatorio de la Violencia (IUDPAS-UNAH).

armadas), entre otras. De acuerdo con algunos entrevistados, dichas agencias no siempre colaboran ni se comunican adecuadamente. De igual forma, los centros penitenciarios del país presentan una problemática muy extrema donde el autogobierno, la corrupción y la operación del crimen se manifiestan en sus operaciones y estructuras básicas. Todo lo anterior limita los resultados de las acciones diseñadas para disuadir, prevenir y ejercer un control efectivo sobre los factores que generan violencia e inseguridad en este país centroamericano.



Fuente: Ian Mackenzie / Flickr / Creative Commons

LA PÉRDIDA DEL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA: EL CASO DE LA CEIBA, HONDURAS

Autogobierno y corrupción dentro de los centros penales

La problemática registrada en los centros penales de Honduras es especialmente aguda, lo cual ha orillado al gobierno a tomar medidas extremas, entre las que destacan la construcción de cárceles de máxima seguridad y el traslado hacia estos nuevos espacios de reos acusados en su mayoría por crímenes de alto impacto. En los últimos meses se han llevado a cabo diversos operativos de traslado de reos desde distintas prisiones hondureñas hacia dos prisiones de máxima seguridad. Una de estas prisiones está ubicada en Ilima, Santa Bárbara y es conocida como “El Pozo.” La segunda, denominada “La Tolva” o “El Pozo 2”⁶, se encuentra en Morocelí, en el departamento de El Paraíso, a una hora de la capital hondureña. Se ha informado que los reos que han llegado en los últimos meses a estas dos prisiones de máxima seguridad son en su mayoría miembros activos de las maras o pandillas transnacionales (MS-13 y Barrio 18), y solían operar desde los mismos reclusorios.

Es también ampliamente conocido que dentro de los centros penales no existe un control total por parte del aparato estatal. Incluso puede decirse que las cárceles en Honduras son gobernadas también por la delincuencia organizada con conocimiento, anuencia y quizás colaboración de las autoridades encargadas de cuidar y administrar dichas instituciones. Lo anterior pudo verificarse en alguna medida a través de la visita que realizamos a dos centros penales en el país. Ahí pudimos comprobar lo que ya muchos han reportado en distintas ocasiones: que dentro del recinto existe un autogobierno administrado por los denominados “privados de libertad”, quienes eligen a su coordinador —de entre ellos mismos— siendo éste la persona que mantiene el orden, establece una comunicación directa con las autoridades

6 Ver <http://www.latribuna.hn/2017/05/16/conozca-pozo-ii-albergara-mas-600-reos-video-galeria/>.

del centro penal y organiza y administra las actividades de todo tipo (incluso los negocios) dentro de las instalaciones.

Pareciera ser que es sólo fuera de los centros penales el espacio donde las autoridades ejercen un control parcial. No obstante la sobrepoblación y el severo hacinamiento dentro de las cárceles en La Ceiba, las precarias condiciones en parte de sus instalaciones y el autogobierno con reglas poco claras para aquellos que no nos encontramos privados de libertad o resguardando sus instalaciones, pareciera existir una organización medianamente efectiva que mantiene el orden y una relativa estabilidad.

Es del conocimiento público que dentro de los centros penales se opera la extorsión a negocios y familias en diversas regiones del país. También aquellos que realizan labor social dentro las prisiones en las zonas que visitamos nos informaron sobre el uso de

Es del conocimiento público que dentro de los centros penales se opera la extorsión a negocios y familias en diversas regiones del país.

celulares, la corrupción para obtener casi cualquier cosa —incluyendo el espacio, las camas y cualquier otro beneficio dentro de la prisión— además del consumo de drogas por parte de un número considerable de aquellos privados de libertad. Pareciera ser que el consumo de drogas y diversos negocios particulares y otras actividades económicas son permitidos también dentro de las cárceles hondureñas, incluyendo las operaciones de las maras y pandillas y algunas actividades de la delincuencia organizada. Todo esto se realiza en el marco de la falta de apoyo institucional y condiciones mínimas de protección y seguridad a las autoridades que resguardan las instalaciones de los centros penales. Es muy visible la falta de apoyo por parte del gobierno nacional al personal que resguarda los recintos. Destacan los bajos salarios y las precarias condiciones de trabajo de los custodios y demás personal oficial.

Es también del conocimiento general que en los centros penitenciarios de Honduras se ha perdido el monopolio de la violencia y que el modelo de las pandillas locales, regionales y transnacionales se opera y se dirige incluso dentro de estos espacios. La responsabilidad no parece residir de manera exclusiva en quienes con limitadas condiciones de trabajo y altos niveles de inseguridad dirigen y operan directamente los centros penales, sino en la falta de supervisión y corrupción en las altas esferas del gobierno nacional. Después de esta visita nos fue posible constatar lo que muchos ya han reportado sobre la vida en las cárceles de esta región de nuestro continente. Esta situación es ampliamente conocida por las autoridades hondureñas, quienes reconocen además el contubernio del propio gobierno y los custodios con los líderes de los grupos criminales que operan desde las prisiones. Lo anterior no es exclusivo de Honduras sino que es un modelo que se extiende a los otros países del Triángulo Norte en Centroamérica e incluso a México —como lo hemos podido constatar en otras visitas a penales en la región sur del país que tiene frontera con los Estados Unidos.

La pérdida del monopolio de la violencia en otras áreas

Seguridad pública y crimen organizado

En fechas recientes, la inseguridad y tasa de homicidios en La Ceiba se han incrementado (ver Cuadros 1–2 y Gráficas 1–2). Esto parece responder al desmantelamiento de importantes grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico en el marco de extradiciones y declaraciones de líderes de estas agrupaciones criminales en los Estados Unidos (por ejemplo, el caso de los denominados “Cachiros”⁷). El desmantelamiento y la fragmentación de dichos grupos que una vez dieron cierta coherencia y estabilidad al modelo criminal en esta región, han provocado una lucha por el poder al interior de los grupos, lo cual alimenta las riñas internas, y por lo tanto eleva el número de homicidios. Ello deriva en la necesidad de acceder a recursos materiales por otras vías alternas al narcotráfico.

En este contexto se recurre crecientemente a la extorsión como fuente de ingresos para los líderes de facciones que han resultado de la división de los grupos que antes controlaban las principales actividades criminales transnacionales en la región. En otras palabras, es posible apreciar actualmente una situación de “delincuencia organizada desorganizada”

Para muchos ciudadanos, el problema de las adicciones va en aumento y alcanza a una población cada vez más joven dentro de los recintos escolares.

Por otro lado, para muchos ciudadanos, incluso para algunos miembros del poder judicial local en La Ceiba, el problema de las adicciones va en aumento

y alcanza a una población cada vez más joven dentro de los recintos escolares. Al mismo tiempo, la ciudadanía se siente más insegura y reporta un aumento de la delincuencia común y extorsión generalizada a toda una gama de negocios y actividades económicas.

No obstante lo anterior, se pudo apreciar una cierta normalidad en la vida nocturna en la ciudad, lo que podría sugerir un relativo control de los bares y centros nocturnos por parte de ciertos actores (aún bien organizados) de delincuencia organizada, así como la participación de éstos en la distribución de drogas en estos lugares. En lo que se refiere al narcotráfico internacional, nos fue difícil constatar una nueva dirección o reducción en el negocio, pero es del conocimiento público la estrecha relación existente entre las maras o pandillas locales y el narcotráfico internacional para cuestiones de transporte a lo largo de territorio hondureño y la venta de una parte de la droga de menor calidad⁸

Los esfuerzos recientes en materia de reforma policial en La Ceiba —que incluyen programas de capacitación, controles de confianza y depuración de policías— han sido bien recibidos por la sociedad en general y en especial por los empresarios, quienes a diferencia de otros segmentos de la población hondureña, dicen incluso registrar menores tasas de extorsión y secuestro. En una visita a la Cámara de Comercio e Industrias Atlántida aprendimos sobre

⁷ Ver <http://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/cachiros>.

⁸ En el caso de la cocaína proveniente de Colombia y en tránsito por Honduras hacia la Unión Americana, podríamos hablar de la venta de crack en algunas zonas del país.



Fuente: Ian Mackenzie / Flickr / Creative Commons

la labor de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión (FNA) de la República de Honduras,⁹ la cual parece atender principalmente a los empresarios y élites económicas puesto que el común de la población no se manifestó tan esperanzada con el tema de la extorsión como aquellos que tienen más recursos económicos y reciben directamente el apoyo de las autoridades. La percepción del grueso de la población con la que conversamos en La Ceiba es que la extorsión y la delincuencia común han ido en aumento al desmantelarse los grupos de delincuencia organizada que brindaban cierta estabilidad al controlar los principales espacios de criminalidad en la región. Eran ellos quienes en el pasado reciente parecían ejercer un control sobre la violencia, arrebatándole el monopolio del uso legítimo de la misma al Estado.

El problema de las compañías de seguridad privada

Otro grave problema que se añade a la difícil situación que viven los habitantes de La Ceiba —y de otras regiones del país— se relaciona con actores cuyos espacios de acción no son controlados por el aparato estatal. En este sentido destaca el tema de las compañías de seguridad privada cuyo modelo de acción y administración es muy poco transparente y llegan a ocupar espacios criminales y reforzar a la delincuencia organizada. En entrevista con algunas autoridades locales, actores empresariales y miembros de la sociedad civil se nos informó sobre el problema que representan estas compañías para la seguridad de la región dada la poca regulación de las actividades de estos grupos, así como la falta de controles de confianza que debieran aplicarse a los elementos que trabajan para dichas compañías. Se nos llegó incluso a comentar que en ocasiones miembros de la delincuencia organizada crean empresas de este tipo —siguiendo los procedimientos legales— con el fin último de asegurar la protección de la integridad física de sus líderes y resguardar sus actividades criminales, además de funcionar como espacios propicios para el lavado de dinero. Parecería ser entonces que las empresas de seguridad privada en Honduras, lejos de coadyuvar a la seguridad ciudadana, se mantienen como instrumentos de control criminal y detonadores de violencia en espacios semi-regulados.

⁹ Ver <http://www.dnii.gob.hn/fna.html>.

¿Pandillas o autodefensas?

En el marco de nuestra visita a La Ceiba, tuvimos la oportunidad de visitar un Centro de Alcance en la Colonia Suyapa que se caracteriza por sus muy altos niveles de marginación y violencia. En este lugar, al igual que en zonas del mismo tipo, no es fácil entrar y solo puede hacerse si uno va acompañado de personas que habitan en esas comunidades. La dificultad en cuanto al acceso radica en la peligrosidad y en la protección que aseguran de los habitantes de la zona para evitar la entrada de otras maras o pandillas. Aquí aprendimos de la existencia de un grupo sui generis de alegada “autodefensa” que cobra una cuota a los habitantes de la Colonia a cambio de protección.

La cuota que recolecta este grupo es similar a la que cobran las maras o pandillas locales en diversas comunidades difíciles de Honduras, pero en este caso nos pareció que los habitantes de Suyapa se sentían seguros y confiaban en esta nueva fuerza de civiles armados, pues aseguraban que los protegían efectivamente de la entrada de visitantes no deseados o de aquellos grupos de delincuencia organizada o pandillas que sólo desean expandir su territorio y extorsionar a los habitantes de la región. No obstante lo anterior, otros ceibeños (o habitantes de la Ceiba) equiparaban a este grupo con pandilleros o grupos dedicados a realizar limpieza social. El grupo referido es conocido en Suyapa como “Los Pumas”. Cabe destacar que dicho modelo de grupo de supuesta autodefensa no es exclusivo de Suyapa; existen otros grupos del mismo tipo en distintas regiones del país.

Corrupción en la municipalidad de La Ceiba

El problema de la corrupción en la región hondureña de La Ceiba alcanza niveles inimaginables. Durante la visita que realizamos al edificio de la municipalidad para hablar con algunos funcionarios locales pudimos darnos cuenta del deterioro de sus instalaciones, la seguridad del recinto y la falta de aseo en el lugar. Ahí tuvimos la oportunidad de hablar con el vicealcalde de la ciudad y nos enteramos de que en la fecha de nuestra visita habían pasado ya varios meses (8 en total) sin que ninguno de los empleados de la municipalidad —incluido él mismo— hubieran recibido pago alguno por el ejercicio de sus funciones. La noticia nos sorprendió y se nos comentó que el alcalde argumentaba deudas y falta de recursos por compromisos previos con actores no identificados.

El problema de la corrupción en la región hondureña de La Ceiba alcanza niveles inimaginables.

El hecho era del conocimiento de todos los habitantes de la ciudad quienes alegaban que la situación derivaba de los altísimos niveles de corrupción en la municipalidad que podrían involucrar al alcalde y a grupos de interés poderosos —algunos quizás vinculados a delincuencia organizada. Sin embargo, la explicación no era clara, no existe investigación formal sobre el caso y parecía ser que el gobierno nacional se ha alejado y se intenta desentender de la autoridad local —no obstante que los liderazgos en ambos niveles pertenecen al mismo partido político. Cabe destacar, además, que no se pudo entonces apreciar una movilización efectiva por parte de

los empleados de la municipalidad para lograr que se reanudaran los pagos de sus salarios. Algunas personas nos comentaron que la fórmula que los empleados habían encontrado para solventar sus gastos consiste en las rentas que obtienen por el cobro irregular de servicios que proporciona la alcaldía. En otras palabras, el círculo de la corrupción en la alcaldía de La Ceiba parece convertirse en un problema recurrente y estructural.

REFLEXIONES FINALES. EL GRAN PROBLEMA DE HONDURAS: LA CORRUPCIÓN

Perdiendo el monopolio de la violencia

Las experiencias analizadas en la ciudad de La Ceiba en Honduras nos muestran una situación en la que claramente el Estado ha perdido el monopolio del uso legítimo de la violencia y de algunas otras funciones propias del Estado. En materia de seguridad pública, combate al crimen organizado, administración y vigilancia en los centros penales, así como en las labores cotidianas del gobierno municipal, son claramente identificables los espacios que controlan otros actores extra-institucionales y no vinculados al aparato estatal como son los grupos delincuenciales, las autodefensas criminales y los mismos privados de libertad en los penales donde cumplen su condena. En este contexto, la corrupción se mantiene como el engranaje de las funciones que competen al Estado. Para algunos, esta situación se asemejaría a la de un “Estado fallido.” Sin embargo, no es posible afirmar que Honduras es en su totalidad un Estado fallido; sólo algunas partes del país parecerían serlo pues aquí se ha perdido el monopolio del uso legítimo de la violencia. Este monopolio, según Max Weber, es una característica del Estado y es claro que, en algunas regiones de este país como La Ceiba, no se mantiene.

Migración, drogas y corrupción

El tema de las drogas —narcotráfico, narcomenudeo y adicciones— es un grave problema en Honduras que se va extendiendo y que abarca espacios importantes de la vida en las regiones más violentas y marginadas del país. Sin embargo, las drogas no parecen ser el principal flagelo de esta nación centroamericana. Los hondureños consumen en su mayoría drogas de bajo costo como la mariguana, y en mucho menor medida crack y otras drogas también accesibles a población de recursos limitados. Es verdad que el problema de las adicciones se ha extendido de forma significativa, particularmente entre una población cada vez más joven. También es cierto que no parecen existir esfuerzos coordinados y efectivos para combatir las adicciones. Hay mucho que hacer en este sentido y es imperativo concentrar los esfuerzos en esta dirección por el gran riesgo que representan las adicciones para la juventud, el bienestar y la seguridad de las comunidades en este país.

No obstante lo anterior, y haciendo una evaluación de los principales problemas de seguridad

en las regiones visitadas, podemos concluir que los principales problemas en Honduras tienen que ver con la falta de oportunidades económicas, pero sobre todo con la corrupción estructural que abarca espacios fundamentales de desarrollo político, económico y social en esta región centroamericana. El desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades económicas, así como la extrema violencia que se vive en amplias zonas del país son al mismo tiempo las causas principales de desplazamiento forzado interno y de migración internacional, cuyas dinámicas de retorno suelen ser también generadoras de crimen y violencia extrema. La permanencia de los hondureños en su país y su desarrollo exitoso y armónico dependen de mejores condiciones de vida en espacios de estabilidad democrática y ausencia de conflicto social y violencia por delincuencia organizada.

La resolución de los principales problemas de desarrollo y seguridad que aquejan a esta nación centroamericana no serán posibles si no se termina con el ciclo de la corrupción — que parece ser aquí estructural y endémico— y no se tomen las medidas adecuadas para erradicar este mal, que parece ser el principal problema de Honduras. Mientras la impunidad,

la falta de Estado de Derecho y la corrupción continúen definiendo las relaciones en todos los órdenes de la vida en Honduras, no se resolverá el problema de marginación,

De nada sirve trasladar a los reos más peligrosos e influyentes a penales de máxima seguridad cuando las autoridades son corruptibles y podrían mantenerse los mismos vicios pero ahora en nuevos lugares.

inseguridad y violencia que lleva a comunidades enteras a emigrar en busca de una mejor calidad de vida que no pueden encontrar en su país. Por ejemplo, de nada sirve trasladar a los reos más peligrosos e influyentes a penales de máxima seguridad cuando las autoridades son corruptibles y podrían mantenerse los mismos vicios pero ahora en nuevos lugares.

En este momento se registran algunos avances y buenas intenciones, sobre todo en el tema de la reforma policial y la reforma al sistema penitenciario en Honduras. No obstante, aún se mantienen muchas dudas sobre la sustentabilidad y efectividad a largo plazo de estas iniciativas. El panorama actual no es muy alentador en este sentido, pues la problemática actual se complica aún más en el marco de un proceso electoral que podría dificultar el avance democrático en este país centroamericano. Recientemente, surge una nueva controversia política luego del anuncio del presidente Juan Orlando Hernández de buscar la reelección amparada en un fallo judicial que despenaliza la prohibición a un segundo mandato presidencial¹⁰. Al mismo tiempo, se percibe actualmente una concentración de poder y fuerte control de las instituciones por parte del Presidente de la República de Honduras. El papel de la ciudadanía y la participación amplia de la sociedad civil parecen ser claves como instrumentos de cambio y resistencia a las prácticas autoritarias que promueven al final la corrupción, el subdesarrollo y la violencia.

¹⁰ Dicha decisión es considerada anti-constitucional. En efecto, la Constitución del país centroamericano en su artículo 239 prohíbe que quien haya ejercido la titularidad del poder ejecutivo pueda reelegirse en el cargo. En abril de 2015 se declara inaplicable ese artículo "pétreo" de la Carta Magna hondureña.

Agradecimientos

Agradezco enormemente a todos aquellos que compartieron sus experiencias y puntos de vista sobre los temas de mayor relevancia en las regiones que visitamos. Todas estas interesantes perspectivas fueron cruciales para la elaboración de este reporte. Reconozco el valor y el trabajo de los miembros de la sociedad civil y líderes comunitarios en zonas de alto riesgo y amplia presencia de maras y pandillas. Su perspectiva fue extremadamente valiosa para comprender los principales problemas que afectan a Honduras en la actualidad. Agradezco de manera muy especial al personal de los centros penales en La Ceiba, quienes nos facilitaron el acceso y compartieron su conocimiento y experiencia con honestidad y profesionalismo. Es importante reconocer los grandes retos que enfrentan día a día para el desarrollo de sus labores en condiciones de alto riesgo en materia de seguridad y contando con muy escasos recursos; sería interesante que se les brindara apoyo adicional para realizar sus funciones. Agradezco también al equipo de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras (<http://radioprogressohn.net/>), quienes nos compartieron su visión sobre la situación actual en su país; son loables su compromiso y su labor social. Reconozco también la importante labor del Pastor Daniel Pacheco en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula. La visita que realizamos con él a una de las zonas más peligrosas de la región nos mostró el lado humano de aquellos que pertenecen a las maras y pandillas y nos brindó una comprensión mucho más amplia de las causas de la violencia que se sustentan principalmente en la fuerte marginación, vulnerabilidad e injusticia social. Finalmente agradezco de manera muy especial a Fiorella Moncada, Geovannina Castro, Joy Olson y Eric Olson por su compañía, paciencia y por las experiencias compartidas que hicieron posible esta investigación; gracias a ellos por su amistad y su apoyo. En particular agradezco a Eric Olson por organizar este viaje conmigo, por su apoyo siempre y por compartir sus reflexiones en el camino, muchas de las cuales se reflejan en el presente escrito, sobre todo el tema de la corrupción y el Estado fallido en la región de La Ceiba.



**Celebrating 40 Years
Latin American Program**

W | Wilson Center



@LATAMProg



facebook.com/LatinAmericanProgram

www.wilsoncenter.org/program/LatinAmericanProgram

Woodrow Wilson International Center for Scholars
Latin American Program
One Woodrow Wilson Plaza
1300 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20004-3027

